

René Peña Morgan
70.6a;66.20;63.6a;66.00;00.00;00.00;00.00;00.00;00.00;00.a2;5c
09/09/21 11:55:15

OBATOR

ebas, se
 e quejos
 eroico, p
 acción d
 Tabasco.
 la Rosa
 24 de ju
 dederal de
 *** , 4) C
 de marz
 * *****
 ación d
 udes a
 de la Que
 ***** , De
 ***** :
Derech
 stitutivos
 presenta
 ora Publ
 ***** **
chos Hu
 tutivos d
 licenciad
 federal, en
 ante el J

René Peña Morgan
70.6a;66.20;63.6a;66.00;00.00;00.00;00.00;00.00;00.00;00.00;a2.5c;
09/09/21 11:55:15

ez de Di
éngasele
es para l
or perdic
n posterio

dependiente
integrado
correspond

autos d

Técnica
anos del
e ** *
* *****
** ** *****
***** **

** *****
***** *****
*** *****

[illegible]

Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General **4/2020** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, **se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte**, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales.

Luego, en Acuerdo General **8/2020**, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del **seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte.**

“Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período **del 16 al 30 de junio de 2020**, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados:

8

De igual forma, mediante **Acuerdo General 15/2020**, se estableció lo siguiente:

“ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue:

*Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el **período del 16 de junio al 15 de julio de 2020**, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados...”*

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA.

Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece.

Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: **“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO”**.

En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama de las autoridades responsables:

- a) Los actos de tortura en la integridad física de ****

```
***** ***** ***** *****; y,
```

- b) La omisión de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, particularmente de prevención de tortura y malos tratos.

Lo que, a juicio de este juzgador constitucional, constituyen actos que encuadran dentro de los supuestos de casos urgentes establecidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los acuerdos generales anteriormente citados.

No pasa inadvertido que los quejosos también reclaman la omisión de las autoridades de asegurarse que las “revisiones” se apeguen a la ley y sean respetuosas de derechos humanos; la falta de supervisión de las labores de los órganos y direcciones a su cargo para que cumplan con los derechos humanos; la omisión de políticas públicas que incidan positivamente en el combate efectivo y la prevención de la tortura y los malos tratos en el país; y la omisión de cumplir con el monitoreo y prevención de la tortura

Sin embargo, no se analizan como actos destacados, toda vez que guardan relación directa con los hechos

*** *****

pes ni m

tado el d
a éstos,

los re
SEIMIE
dispuesto
.

erior, la
rema Co
época, A
N, Materi

O. NEC
LAS AU
ctos que
n esta m
rminos d
mparo”.

Protección

René Peña Morgan
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.5c
09/09/21 11:55:15

16

RESPONSABLES. Cuando las autoridades responsables en su informe justificado niegan la existencia del acto reclamado consistente en la tortura psicológica, no corresponde al quejoso interno en un centro penitenciario desvirtuar la negativa, sino que es a aquéllas a quienes incumbe acreditar su inexistencia. Lo anterior es así, porque se asume que la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido argumentar que el quejoso no probó plenamente su denuncia para descartarla. Por lo anterior, es desacertado que el Juez en la sentencia recurrida hubiera sostenido genéricamente que, por el hecho de que las responsables negaron el acto de tortura y el quejoso no desvirtuara esa negativa, procedía sobreseer en el juicio, en tanto que el resolutor debió hacer una distinción entre los actos reclamados a efecto de establecer correctamente las cargas probatorias, pues tratándose de la tortura psicológica alegada, correspondía a las responsables demostrar la inexistencia de ese acto. Máxime que la tortura puede ser utilizada en personas privadas de su libertad en los centros de reclusión como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros, y podría resultar extremadamente complejo para una persona en esas circunstancias evidenciar la existencia de los actos de tortura alegados. En este sentido, en relación con la tortura psicológica reclamada, el juzgador está obligado a revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tenerla por acreditada, lo que implica pronunciarse en cuanto al fondo de la cuestión planteada”.

“ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SI SE RECLAMAN EN EL AMPARO INDIRECTO, Y EN EL INFORME

[illegible]

de causa
formidad
teria, tan

TOYOTA

s de amp
omisión c
de de
e tortura

retament
reden lo
lítica de

considera
os conc
que sea
ción lega

VIOLAC
LOS
AUSTIVIL

⁸**Artículo 62.** Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo

⁹ En términos del numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

En cuanto a ***** (foja 128), el actuario hizo constar que ***“A simple vista no se advierten rastros de tortura en el quejoso; pero solicita que se le regrese al módulo donde estaba antes, ya que en el actual es víctima de malos tratos por parte de un custodio”***.

De las referidas diligencias también se obtiene que los aludidos quejosos se encuentran recluidos en el **Centro Federal de Readaptación Social Número 6 “Sureste”**, con residencia en Huimanguillo, Tabasco.

Sumado a ello, de las constancias remitidas por la **Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 6 “Sureste”**, con residencia en Huimanguillo, Tabasco, se advierte la **nota médica** relacionada con el quejoso *****, en la que se aprecia que la doctora Amelia del Carmen Arano Salgado, hizo constar que presentaba ***“tórax anterior y brazo con presencia de múltiples equimosis violáceas”*** (foja 216).

Respecto del impetrante ***** , hizo constar que presentaba ***“dolor a la digitopresión a nivel de apófisis xifoidea”*** (foja 222).

Con motivo de lo anterior, este juzgador considera que existe base razonable para establecer que las agresiones referidas por los mencionados quejosos, fueron ocasionadas dentro del precitado centro penitenciario, donde se encuentran internos, el cual está a cargo de las autoridades responsables, sin que éstas acreditaran que fuera diverso el origen de las mismas.

Por lo que es evidente que las autoridades responsables han incumplido con lo dispuesto en los artículos

“Artículo 20...

B. De los derechos de toda persona imputada:

...

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. **Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura.** La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio...”.

“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado...”

De lo anterior se obtiene que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.

Aunado a ello, es importante tener en cuenta lo dispuesto en los siguientes instrumentos jurídicos:

Declaración Universal de Derechos Humanos

“Artículo 5.

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado”.

“Artículo 10

Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso, salvo en el que se siga contra la persona o personas acusadas de haberla obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba de que por ese medio el acusado obtuvo tal declaración”.

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura

“Artículo 11o.- *El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión, y de quince a sesenta días multa, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes. Para la determinación de los días multa se estará a la remisión que se hace en la parte final del artículo 4o. de este ordenamiento”.*

Por su parte, los ordinales 14, 15, 16 y 58 de la **Ley Nacional de Ejecución Penal**, instituyen:

“Artículo 14. De la Autoridad Penitenciaria

La Autoridad Penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas...”.

“Artículo 15. Funciones de la Autoridad Penitenciaria

Los defensores, en todo momento, podrán entrevistar a las personas privadas de la libertad en privado. No podrá limitárseles el ingreso de los objetos necesarios para el desempeño de su tarea, ni podrá revisarse el contenido de los documentos que introdujesen o retirasen de los Centros Penitenciarios.

Se deberá establecer las normas necesarias para facilitar el ingreso de las instituciones públicas que tengan como mandato vigilar, promover o garantizar los derechos de los grupos vulnerables o personas que por sus condiciones o características requieran cuidados especiales o estén en riesgo de sufrir algún tipo de discriminación, así como las condiciones en las que los representantes de organismos privados y civiles de protección y defensa de los derechos humanos podrán acceder a entrevistar o documentar lo que consideren necesario, pudiendo mediar para ello una petición expresa de la persona privada de su libertad.

La obstrucción de la labor del personal judicial, de las personas visitadoras de los organismos públicos de protección de los derechos humanos, de las defensoras, del Ministerio Público y de las observadoras será sancionada administrativa y penalmente, en términos de la legislación aplicable”.

“Artículo 17.- Los titulares de los centros federales tendrán las funciones siguientes: A) De los CEFERESO:

28

“Artículo 36...

...

XV. Coadyuvar, en la investigación, resolución y seguimiento a las quejas y denuncias de posibles violaciones en materia de derechos humanos, en el ámbito de competencia de la Secretaría, así como coordinar el seguimiento que se dé a éstas por parte de los Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría...”.

Asimismo, conforme al ordinal 46¹⁰ del precitado reglamento, los titulares de los Órganos Administrativos

¹⁰ **Artículo 46.-** Los titulares de los Órganos Administrativos Desconcentrados tienen las facultades genéricas siguientes:

- I.** Planear, programar, dirigir, organizar, controlar y evaluar el funcionamiento y desempeño del Órgano Administrativo Desconcentrado a su cargo;
- II.** Acordar con el Secretario, directamente cuando los Órganos Administrativos Desconcentrados le estén adscritos, o en su caso, por conducto del Subsecretario de la materia o del servidor público que el Secretario determine, la resolución de los asuntos relevantes cuya tramitación corresponda al Órgano Administrativo Desconcentrado a su cargo;
- III.** Ejercer las funciones que les sean delegadas y realizar los actos que les instruya el superior jerárquico;
- IV.** Coordinar la formulación de políticas, estrategias y medidas administrativas, operativas y financieras que apoyen la continuidad de los programas y proyectos institucionales para su modernización, innovación y desarrollo, e impulsen la desconcentración de sus actividades;
- V.** Suscribir los convenios, contratos, acuerdos y demás documentos, en el ámbito de sus atribuciones, de conformidad con las disposiciones y lineamientos que fijen las unidades administrativas correspondientes de la Secretaría;
- VI.** Presentar al Secretario un informe anual sobre los avances, evaluación y resultados en la operación e instrumentación de los programas, objetivos, políticas, proyectos y actividades del Órgano Administrativo Desconcentrado a su cargo;
- VII.** Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos a su cargo;
- VIII.** Conducir la administración del personal y de los recursos financieros y materiales que se les asignen para el desarrollo de sus actividades;
- IX.** Coordinar la formulación del Programa Operativo Anual y del anteproyecto de presupuesto anual del Órgano Administrativo Desconcentrado a su cargo y, una vez autorizados, conducir su ejecución;
- X.** Coordinar la elaboración de proyectos de manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público para dictamen y autorización de las autoridades competentes;
- XI.** Aprobar los anteproyectos relativos a la organización, fusión, modificación, creación o desaparición de las unidades administrativas que integran el Órgano Administrativo Desconcentrado a su cargo, previa autorización del Secretario;
- XII.** Aprobar la contratación y adscripción del personal a su cargo y los programas de desarrollo y capacitación, de acuerdo con las necesidades del servicio, así como resolver los casos de sanción, remoción, cese, rescisión de contratos y terminación de los efectos del nombramiento, según corresponda, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y en los términos de las políticas y lineamientos que determine el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas;
- XIII.** Proponer al Secretario la designación de los servidores públicos inmediatos inferiores al del Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado, conforme las disposiciones jurídicas aplicables, así como la delegación de facultades en servidores públicos subalternos;
- XIV.** Someter al superior jerárquico los estudios y proyectos que se elaboren en el área de su responsabilidad. Cuando se trate de disposiciones jurídicas, será necesario recabar previamente el dictamen favorable de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia;

República Mexicana
70 años 20 años 66 años
09/09/21 11:55:15



JUICIO DE AMPARO 532/2020-7

Desconcentrados tienen, entre otras, la facultad de **coordinar y supervisar que se cumpla estrictamente con las disposiciones jurídicas en todos los asuntos cuya atención les corresponda.**

- XV. Participar en el ámbito de su competencia, en los mecanismos de colaboración, coordinación y concertación que se establezcan con las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales o alcaldías, así como con los sectores social y privado;
- XVI. Participar en el ámbito de su competencia, en el cumplimiento de compromisos convenidos con las unidades administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría, así como con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y municipales o alcaldías, dentro del marco de los programas regionales, sectoriales, especiales, institucionales y demás a cargo de la Secretaría;
- XVII. Establecer el Programa Interno de Protección Civil del Órgano Administrativo Desconcentrado a su cargo;
- XVIII. Coordinar con los titulares de las unidades administrativas y otros Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría, las acciones necesarias para el eficaz despacho de los asuntos de su competencia;
- XIX. Proporcionar información y brindar la cooperación técnica que les sea requerida oficialmente, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
- XX. Establecer las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales que en el ámbito de su competencia posean, recaben o transmitan, a fin de evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, debiendo asegurar su manejo y tratamiento para los propósitos para los cuales se hayan obtenido;
- XXI. Atender y resolver los asuntos jurídicos del Órgano Administrativo Desconcentrado a su cargo, de conformidad con los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la Secretaría y que hubiere establecido la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia;
- XXII. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de resoluciones dictadas por servidores públicos subalternos, así como sustanciar aquellos recursos que, en razón de su competencia, les corresponda y someterlos a la consideración y firma de los servidores públicos que deban resolverlos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;
- XXIII. **Coordinar y supervisar que se cumpla estrictamente con las disposiciones jurídicas en todos los asuntos cuya atención les corresponda;**
- XXIV. Cumplir con las normas de control y fiscalización que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables;
- XXV. Autorizar y vigilar el ejercicio del presupuesto asignado al Órgano Administrativo Desconcentrado a su cargo, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
- XXVI. Asegurar que se atiendan los requerimientos que le formule la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia relacionados con el ejercicio de sus funciones;
- XXVII. Presidir, coordinar y participar en las comisiones, comités u otros órganos colegiados que les encomiende el Secretario o el superior jerárquico y, en su caso, designar suplente, así como informar de las actividades que se realicen en dichos órganos colegiados;
- XXVIII. Informar y acordar con el Secretario, con el superior jerárquico, o con el servidor público que éste determine, las actividades y acciones en el ámbito de su competencia e informarle del avance y resultado de los mismos, y
- XXIX. Proponer al Secretario las acciones, políticas y estrategias en materia de cooperación internacional y atender las directrices que éste emita para tal efecto.



“Artículo 72.- Para garantizar de manera integral la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, se crea el Mecanismo Nacional de Prevención como la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el territorio nacional, conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

“Artículo 32.- El Mecanismo Nacional de Prevención realizará visitas de inspección, de forma permanente y sistemática, a centros de privación de libertad de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 19 a) del Protocolo Facultativo y en el artículo 72 de la Ley General, en su caso, también realizará visitas a aquellos lugares que sin tener las características de centros de detención alojen a personas que por sus condiciones personales o de salud deban permanecer en ellos, entre otros, de quienes padezcan alguna enfermedad psiquiátrica, para examinar las condiciones de internamiento y trato, para evaluar si son los apropiados, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia”.

René Peña Morgan
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.58
09/09/21 11:55:15

protegidos
venir, inve
derechos

Suprema
s 1396/2
nde establ
ar posibl
anos o
ciones:

- chos act
a inmedia
más, d
osa, con
de las
sponsabl
bridades
do, lo q
ue pued
ntizar la
alud enc
os ofendi
emente

¹¹ Localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I página 233, registro 2009996.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO

JUICIO DE AMPARO 532/2020-7

médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión.

e) Cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia.

f) La carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla.

En ese contexto, el suscrito considera que las autoridades responsables han inobservado sus obligaciones constitucionales y legales respecto de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos de las que los quejosos refieren han sido objeto en el **Centro Federal de Readaptación Social Número 6 “Sureste”**, con residencia en Huimanguillo, Tabasco.

Lo anterior, no obstante que, según se desprende de las copias certificadas remitidas por el **Director de lo Contencioso de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos en representación de la Presidenta del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura**, con sede en la Ciudad de México, autoridad responsable, existe el **informe de supervisión 9/2016, de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis**; del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, sobre los Centros Federales de



JUICIO DE AMPARO 532/2020-7

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1. Se evite cualquier conducta que pueda constituir un acto de Tortura, Trato Cruel, inhumano o degradante hacia las personas privadas de la libertad, que presuntamente fueron víctimas de los hechos narrados, salvaguardando en todo momento su integridad física y psicológica.
2. Se brinde a las personas privadas de la libertad, la atención médica necesaria que su estado de salud requiera.
3. Se evite cualquier tipo de represalia para las personas privadas de la libertad, así como a sus familiares que hicieron del conocimiento los hechos motivo de las medidas solicitadas.
4. Se tomen en cuenta las cinco recomendaciones que mediante pronunciamiento emitió este Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) para lugares de privación de la libertad ante la contingencia del COVID-19, que

3

consisten en:

- Contar con estrategias de comunicación permanente sobre las medidas, protocolos o lineamientos a implementarse para la prevención y tratamiento (de casos confirmados y sospechosos) del COVID 19, así como, procurar el involucramiento de las personas privadas de la libertad (PPL) en la definición de acciones, a través de mantenerlas informadas sobre las medidas que se adopten, la necesidad de adoptar tales medidas, la manera en que serán implementadas o adoptadas, así como su temporalidad.
- Establecer acciones concretas para el de la población en situación de vulnerabilidad como: personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas inmunosuprimidas o quienes padecen enfermedades crónicas.
- Elaborar protocolos y planes de acción específicos para aplicar las medidas sanitarias en los centros de privación de la libertad.
- Definir espacios con condiciones adecuadas para alojar a las PPL con casos sospechosos o confirmados de COVID 19 y contar con una comunicación permanente con las autoridades de salud para su adecuada atención.
- En caso de restringirse las visitas en los lugares de privación de la libertad, se recomienda establecer mecanismos de compensación de las restricciones al contacto, tales como uso de medios digitales o proporcionar insumos para la comunicación vía telefónica.

Asimismo, consta el acta de circunstanciada de **tres de abril de dos mil veinte**, en la que se hace referencia a hechos posiblemente constitutivos de tortura o malos tratos en agravio de los internos del centro penitenciario en cuestión.

Documentos que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo.



-de veini
médicas p
o en cues
n un hec
omitido
de de
e tortura

á en pre

- o consisten en la recopilación de información adicional para determinar la veracidad de la información que se ha suministrado o fin que se persigue con la integridad de la información.

MENTOS

MENTOS

Suprema
la nor
Interame
tima que
i) la r

MENTOS

Suprema
la nor
Interame
tima que
i) la r

¹² Consultable en la página 1425, del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Materia: Constitucional, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

René Peña Morgan
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.58
09/09/21 11:55:15

do en un
s no ha
la base
contraven
contra c
nstitucio

El párrafo
responde a
la finalidad de
los derechos
y.

o sensu,
a, es de
, la parte
cionalidad
a y com
deben
on.

por ana
ra Sala d
e:

podrán ser tomados
llamado, salvo prueba
torio de los derechos

cial de la Federació

Otros Tratados adoptados por las Américas, el E

por todas la

tura, sin

(artículo

acto c

ser tort

por func

funcione

vez prese
atos, con
anos del
er prese
one.

o de otra índole eficaz en el estado de guerra o a la autoridad pública con su jurisdicción otros en el artículo 1, cuando la investigación o con el de los en los artículos 10, o degradantes.

Todo Estado Parte velará porque toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción **tenga derecho a presentar una queja** y a que su caso sea pronto e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.

René Peña Morgan
70.6a;66.20;63.6a;66.00;00.00;00.00;00.00;00.00;00.00;00.00;a2.5c
09/09/21 11:55:15

es, pues
encargad
observar
nerece s
humano
os tratos

sean n
del deter
ad deber
as perso

ables no
>
del Estad
la base
ra su de
usos tien
nidas, inc
fuerza.

usos tienen
nidad, in
fuerza.

o consid
es ha si
r y rep
manos de

residencia
médica
en la qu
armen A
ax ante
sis viola

dolor a
222).

este juez
establecer
quejosos,
penite
á a carg
editarán
e obten
mparo y
al, es co
es con p

al, es co
es con p

la Coord
aciones
e la Pre
onal de
Ciudad d

²⁰ A las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo.

la vertice
conjuntame
tes—, es
absoluta
decir, l
que no
cidad de
ana.

a la
el derec
ni a ser
gradantes
tegoría e
zgador
acionales
la capa
dignidad
a llegad
cogens, a

stener q
quica y

ducia contra el ter
de garantías con
régimen jurídico in
tenece hoy día al c
ondo, Reparacione

René Peña Morgan
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.5
09/09/21 11:55:15

stirá en
investiga
internacio
su caso,
en los
3, 6 y 8
nir y San
Ley Fed

sustancia
n sido or
a de c

do por la
diligencia
eron cons
ue “el q
nas mar
ctricos
e Seguri

***** (f

ción reci

e le form

n unos o

que “A

en el que

londe es

²² Publicada en la página 561, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época.

René Peña Morgan
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.5c.
09/09/21 11:55:15

lor y al
era asis
io, aten
e a la
a de p
os les a

és de un
ción per
esclar
n su c
gura deli
estigación
des por s

- DO Y
TITUYE
TRAS
EFECTOS
CTO DE
S COM**

No obstante, cabe destacar que este juez constitucional, mediante auto de **veintisiete de marzo de dos mil veinte**, ordenó dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que actuara de acuerdo a sus facultades, en relación a los actos de tortura denunciados por los quejosos en su demanda de amparo (fojas 87 a 91).

Al respecto, en relación al tema de investigación del delito de tortura debe decirse que la Corte Interamericana ha señalado que del artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura deriva que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación²⁵.

En este sentido, ha determinado que el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece:

“[...] cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal [...]”²⁶

Por tanto, la obligación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares no sólo deviene de las normas convencionales de derecho internacional imperativas para los Estados Parte,

25 Caso Fernández Ortega y otros. vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 192 y Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, párr. 176.
26 Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132, párr. 54.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO

JUICIO DE AMPARO 532/2020-7

sino que además se deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien, presenten querellas, pruebas, peticiones o cualquier otra diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al referirse al **derecho a la verdad** ha considerado que la sociedad tiene derecho a conocer íntegramente su pasado, que no sólo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones; asimismo, que **forma parte del derecho a la reparación por violaciones de los derechos humanos**, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición, el derecho que tiene toda persona y la sociedad a conocer la **verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos**.

Así, cuando una persona aduce haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación de oficio y de forma inmediata, llevada a cabo con la debida diligencia y donde la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado; por tanto, es obligación de todas las autoridades del Estado Mexicano, y en concreto, de la Institución del Ministerio Público, en cuanto tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, iniciar una



responsabilidad
terio sust
de la Na



OMEGA

OBLIGACIÓN DE CUMPLIR el deber de los de todos los radantes (b) la inversión de la carga de la prueba y minuciosas y originales respuestas a los derechos de toda la prensa alegando la presencia de un examen y una que las personas muestren establecidas una persona pura, el Estado de dicho cada a cada de la prueba, por lo tanto, el denunciante no "la".²⁷

**Ministerio de
Educación de la
República de Chile**

²⁷ Época: Décima Época, Registro: 2009996, Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. XXI/2015 (10a.). Página: 233

ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades responsables:

Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Seis “Sureste”, con residencia en Huimanguillo, Tabasco, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, y Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, estas últimas con sede en la Ciudad de México:

- a) Se abstengan de ejercer en contra de los quejosos todo acto de tortura, golpes, penas crueles, tratos inhumanos o degradantes;
- b) Girar las instrucciones correspondientes, mediante oficio, a efecto de que todo el personal del **Centro Federal de Readaptación Social Número Seis “Sureste”, con residencia en Huimanguillo, Tabasco**, tenga conocimiento de lo anterior y se abstengan de realizar ese tipo de actos en lo futuro;
- c) Hacer del conocimiento de todo el personal del aludido centro penitenciario, mediante oficio, que deberán tratar a los quejosos con dignidad y respetando de forma permanente sus derechos fundamentales; no someterlos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como protegerlos en todo momento contra amenazas y actos de tortura o agresiones físicas o psicológicas, actos discriminatorios que tenga como fin menoscabar el goce y ejercicio de los derechos humanos, en términos de lo establecido por el artículo 1º Constitucional.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO

JUICIO DE AMPARO 532/2020-7

d) Instruir y supervisar la capacitación inmediata de todo el personal del referido centro de internamiento, en materia de respeto y protección de los derechos humanos, remitiendo a este juzgado federal las constancias que acrediten que todos lo recibieron;

Presidenta del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con sede en la Ciudad de México:

- e) Instruya la investigación de los actos de tortura que los quejosos manifestaron en las diligencias actuariales de **veintiocho de marzo de dos mil veinte**, de manera inmediata, exhaustiva y eficaz, atendiendo a los estándares nacionales e internacionales, a fin de establecer la existencia de los mismos, identificar a los agresores y determinar las responsabilidades conducentes.
- f) De oportuno seguimiento a lo anterior hasta lograr el esclarecimiento de los hechos y determinar lo que conforme a los mismos corresponda, informando a este juez constitucional sus conclusiones.

Agente del Ministerio Público de la federación:

- g)** Conforme a sus atribuciones, continúe la investigación referidos por los quejosos a fin de determinar si existen datos de prueba suficientes e idóneos para establecer que se ha cometido un delito y la identidad de los probables responsables; en su caso, formule la imputación correspondiente; para lo cual, deberá remitir las constancias que lo acrediten e informar el número de carpeta de investigación que recaiga a la misma.



y con la
venir viol
árrafo te
ae en to
ctivas co
conoci
ca, el

NCIA Y
e marzo
amparo
e para o
de sus
lo 8° de
la In
ro de la
ejo de la
rse al res

e marzo
amparo
e para o
de sus
lo 8° de
la In
ro de la
ejo de la
rse al res

establecer
política de
o legal a
ganos ju
s consta
e que las
de sus da
de la pre



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
288750_0238000026696701026.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

FIRMANTE					
Nombre:	René Peña Morgan		Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA					
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.5c		Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	10/07/20 00:42:41 - 09/07/20 19:42:41		Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256				
Cadena de firma:	5d bc e6 28 ba 7c e3 ca 5e 64 89 cb 45 36 fc 68 d4 c8 32 4a 2a 74 ee f4 55 2e 19 a0 ee 38 1c 85 18 f7 22 f9 75 49 b7 50 04 8b 60 9a 9f 26 3e d7 5a 7b 58 e1 db 7f 7c e4 e0 53 53 8a 89 48 b0 bc af 38 ba 8f 0d c8 2e 80 23 9e f5 83 82 ab 15 7a 31 12 d8 17 84 a2 4d aa 83 26 a8 ca 06 7c 73 fe 11 19 52 7c 76 d5 ab 1a 6e c5 43 8a 9c fc b2 72 fe 63 ba 73 0f 54 0f 33 27 33 b3 33 3a 75 30 18 ef 1c 70 9c 55 11 70 84 04 9b 50 6a 88 ff da 67 bc 87 3e 31 35 ea 7c 82 81 b2 0a f5 ed 8b c6 13 45 d1 af be d9 9c f7 7d eb 93 76 cb 92 84 ee 33 ee cd 3b 8e be 6a 7c 77 1b 57 c3 55 ef 96 76 9e 08 65 1e 56 51 f9 8e ac 7e 65 41 f4 00 94 d4 85 82 86 20 2e fc 0c 95 88 ed 2a a4 15 a0 17 b9 63 2e af aa 0e 10 09 f5 f5 ba 9f 87 8c f7 22 2a 3c 93 d8 0d 45 af 27 e1 c1 97 fd 6b 9e 3c c5 4c f0				
OCSP					
Fecha: (UTC / CDMX)	10/07/20 00:42:42 - 09/07/20 19:42:42				
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02				
TSP					
Fecha : (UTC / CDMX)	10/07/20 00:42:42 - 09/07/20 19:42:42				
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Identificador de la respuesta TSP:	13105025				
Datos estampillados:	ENi7ZIYNndK+G6a5Ejfp0I0QTA=				



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	CARLOS CALDERON ESPINDOLA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.73.74	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	10/07/20 01:16:04 - 09/07/20 20:16:04	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	03 ef 29 3f dd 0d 79 b2 71 d2 c5 f2 d2 f2 17 71 93 13 2c ae 28 e4 ba c6 44 a7 be 18 48 65 28 e7 76 32 25 e9 9f 6a 8d ca 16 47 3e 0e 95 49 29 6c 99 31 3d 33 a3 db 90 99 f9 e5 96 57 03 b8 3d 73 1f 8d 1c db ef e6 e6 ae 6a e6 68 cc fa d7 3f 3a 1d ab 6c 20 d0 13 9b d2 ce d8 b1 44 e8 18 bc 9d 12 0f c8 8d 73 13 4a 33 70 05 77 1f 70 57 08 65 7c 55 68 59 15 5d 4f 76 87 c8 b1 7a 67 0b 6b c3 f6 0a ef 20 40 7a a4 61 4f 2f f4 36 ae a3 44 bd 3b 1c 4d f7 fc 76 fe b9 e2 6a a0 33 c7 cd 21 45 f1 9f d3 19 8d a0 8c ba 44 74 e6 f4 2b a4 11 64 b0 7d fe d6 5c b6 c2 ce 5c d0 b7 33 aa c6 de a4 41 a8 14 08 ab e1 33 ec 3b ac ba c4 94 82 59 7c 55 0a 17 68 bb 5c 8b ee d6 aa 06 bd 56 e8 09 54 c3 32 5a 56 2d 8e 5d 36 2a fc e8 f6 d1 dc da 7a bf 4a 19 47 64 fd 9c c7 d3 29 d1 ce b3 c8 6c ab			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	10/07/20 01:16:05 - 09/07/20 20:16:05			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	10/07/20 01:16:05 - 09/07/20 20:16:05			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	13107055			
Datos estampillados:	M8ITPcyPSTqUixC9TDNml0W3Rz4=			

El nueve de julio de dos mil veinte, el licenciado René Peña Morgan, Secretario de Juzgado, con adscripción en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.